



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JOSÉ WILLIAM VALENCIA PEÑA
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. Y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 007 2022 00147 01
Sentencia: S-296

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por la **AFP COLFONDOS S.A.**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de Colpensiones, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de julio de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JOSE WILLIAM VALENCIA PEÑA demandó a PROTECCIÓN S.A. a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del traslado o afiliación al Régimen de Ahorro

Individual, dejándola sin efectos y declarando válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPM, con derecho a regresar a este fondo público. Igualmente, se declare que nunca obtuvo reasesoría antes de cumplir los 47 años, por lo que debería ser COLPENSIONES quien reconozca la pensión de vejez si cumple con los requisitos a la fecha de proferirse la sentencia.

En consecuencia, solicita se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a Colpensiones, todos y cada uno de los aportes, incluidos rendimientos sin descuento por cuotas de administración, y que COLPENSIONES debe reactivar la afiliación, recibir los aportes trasladados y reconocer la pensión de vejez si cumple con los requisitos al proferir la sentencia de fondo, con los intereses de mora o en subsidio la indexación.

De forma subsidiaria solicita se declare que por no brindarle PROTECCIÓN S.A. asesoría y buen consejo al momento del traslado, debe reconocer, al igual que COLFONDOS a título de indemnización de perjuicios, como mesada pensional, el valor equivalente de lo que hubiese recibido si estuviera en el RPM, junto con los perjuicios morales.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 11 de octubre de 1968, que realizó aportes al Régimen de Prima Media -RPM- entre abril de 1988 y abril de 1994 para un total de 266.86 semas en el ISS; que se trasladó al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A. el 13 de julio de 1994; que también se trasladó a PROTECCIÓN, pero que en diciembre de 2021 esta entidad informó haber buscado el formulario de afiliación sin hallar copia del mismo; que cuenta con un total de 1293.85 semanas desde su afiliación al RAIS y 1560.71 en toda su vida laboral; que las AFP no brindaron asesoría, tampoco le explicaron las implicaciones del traslado, características, o diferencias entre la mesada que recibiría en el RAIS y en el RPM; que solicito a Colfondos

y Protección tener nula y/o ineficaz la afiliación; que en noviembre de 2021 realizó reclamación administrativa a COLPENSIONES para que se declarara nula o ineficaz la afiliación al RAIS, la cual fue negada; y que al realizarle el cálculo pensional se evidencia una diferencia en ambos regímenes, lo cual le está causando menoscabo en su calidad de vida.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES manifiesta que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, los aportes y el número de semanas cotizadas, al igual que su traslado a COLFONDOS S.A. y posteriormente a PROTECCIÓN S.A., como las solicitudes de nulidad o ineficacia. Es cierta la reclamación administrativa ante esta entidad y su respuesta negativa; frente a los demás hechos manifestó que no le constan por ser situaciones personales y particulares del actor con terceros ajenos. Se opuso a las pretensiones en tanto no se encuentran soportes fácticos y legales para acceder al reconocimiento de las pretensiones. Como excepciones propuso la inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez y falta de derecho para pedir, improcedencia de la obligación de pagar interés moratorio, improcedencia de la indexación, buena fe, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A., contestó la demanda afirmando que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, pero no le consta de forma directa su afiliación a Colfondos, aclarando que la afiliación a PROTECCIÓN se dio con la AFP Santander S.A. hoy PROTECCIÓN S.A. el 28 de febrero de 1995; es cierta la búsqueda del formulario de afiliación y que no se halló copia del mismo; no es cierto que esta administradora no le haya orientado sobre todas las condiciones y características del RAIS; que son ciertas las solicitudes de nulidad o ineficacia; no es cierto que PROTECCIÓN le hay causado algún tipo de perjuicio. Frente a los demás hechos indicó que no le constan, ya que

se tratan de hechos ajenos a esta entidad. Se opuso a todas las pretensiones por encontrarnos frente a un acto válido y existente, exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, falta del juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguro previsional.

Por último, COLFONDOS S.A. admitió como cierta la fecha de nacimiento del demandante, sus cotizaciones y su traslado al RAIS; no es cierto que no se le haya brindado una asesoría, ya que ésta se le dio de manera clara, concisa e integral, así como se le indicó de las ventajas, desventajas e implicaciones del cambio de régimen; que no es cierto que se le esté causando un lucro cesante; son ciertas las solitudes para declarar nulo o ineficaz la afiliación y no le constan los otros hechos por tratarse de situaciones del demandante y terceros. Se opuso a todas las pretensiones. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por Colfondos, prescripción de la acción para solicitar la nulidad de traslado, compensación y pago, inexistencia de perjuicios, entre otros.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 11 de julio de 2023, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación del demandante a la AFP COLFONDOS S.A. y su posterior traslado a PROTECCION S.A.; 2) **DECLARÓ** que, en virtud de la ineficacia, el demandante se encuentra válidamente afiliado a COLPENSIONES, sin solución de continuidad; 3) **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES los montos existentes en la cuenta de

ahorro individual del demandante con sus respectivos rendimientos, al igual que lo descontado por concepto de gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexado con cargo a sus propios recursos; 4) le **ORDENÓ** a COLFONDOS S.A. trasladar a COLPENSIONES los valores descontados por concepto de gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje descontado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexado con cargo a sus propios recursos; 5) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a validar la afiliación del demandante y recibir la devolución de los dineros ordenados, además de tener en cuenta el tiempo cotizado por el demandante en el RAIS como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral; 6) **CONDENÓ** en costas a PROTECCION S.A. y a COLFONDO S.A.; y se **ABSTUVO** de condenar en costas a COLPENSIONES.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Interpuesto por el apoderado de COLFONDOS S.A., de manera parcial en lo que tiene que ver con la devolución de los gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje de garantía de pensión mínima debidamente indexado, con cargo a los propios recursos, toda vez que los descuentos realizados fueron conforme a consagración legal, pues éstos se realizan tanto en el RPM como en el RAIS, además de que tienen unas destinaciones específicas como es la adquisición de una póliza de seguros previsional para mantener cubiertos los riesgos de invalidez o sobrevivencia, eventualidades para las cuales el demandante estuvo cubierto durante el tiempo que Colfondos ha administrado los aportes; que el decreto 3995 del 2008 señala cuales son los aportes que se deben trasladar con destino a la otra administradora, los cuales son los saldos de la cuenta de ahorro individual y el porcentaje de garantía de pensión mínima, multiplicado por el valor de la unidad vigente a la operaciones al día en se efectuó

dicho traslado, y en ningún momento se establece que con cargo a la propia administradora se deban devolver conceptos como gastos de administración o los descuentos que se realizan para los seguros previsionales; que la Superintendencia Financiera estableció que cuando se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación, procede la devolución o el traslado de los saldos de la cuenta de ahorro individual, que corresponde y que incluya los rendimientos generados como consecuencia de la administración efectuada por la administradora; que debe tenerse en cuenta que la devolución de estos conceptos genera un enriquecimiento injusto a favor de Colpensiones y del demandante, terceros ajenos que no realizaron ninguna labor administrativa o de inversión, y así mismo, se está generando un detrimento en contra de este fondo privado; que los gastos de administración, en ninguno van directamente a financiar la pensión de vejez, por lo que es aplicable el fenómeno de la prescripción; y que la condena de indexación no se debe imponer, pues en el RAIS se generan unos rendimientos que se depositan en la cuenta de ahorro individual y con dichos rendimientos se compensan la pérdida del poder adquisitivo de dichos rubros, lo cual generaría una doble condena.

De igual forma, se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta**, en las condenas adversas a COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada del DEMANDANTE se pronunció ratificando lo ya expuesto durante todo el curso del proceso tendiente a que se declare la ineficacia del traslado del actor del RPM al RAIS, y, por ende, que se confirme la sentencia, ya que las AFP al momento de efectuar el traslado no le brindaron una asesoría clara, completa y eficiente al demandante; que en múltiples ocasiones el órgano de cierre ha manifestado que el deber de información aplica para cualquier tipo de afiliado que se vaya a

trasladar o a afiliarse al RAIS; y que no se puede concluir que la sola firma en el formulario constituya un buen deber de información.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

A esta altura del proceso, se acredita que, *i)* el Sr. JOSÉ WILLIAM VALENCIA PEÑA nació el 11 de octubre de 1968; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí, el día 21 de abril de 1988¹ acumulando 266, 86 semanas; *iii)* que el 13 de julio de 1994 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP COLFONDOS S.A.²; *iv)* y que posteriormente el 8 de febrero del año 1995 suscribió formulario de afiliación con PROTECCION S.A.³, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es

¹ Folios 74 a 75 de la Contestación de la demanda de Colpensiones.

² Folio 34 de la Contestación de la demanda de Colfondos S.A.

³ Folio 51 de la Contestación de la demanda de Protección S.A. y 54 (SIAFP)

menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto*

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de

información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se encontraba laborando para la empresa Diseomer Ltda., cuando llegó la secretaria de la empresa a realizar el traslado de los distintos empleados de la empresa, sin existir algún tipo de asesoría por parte de ninguna de las dos administradoras; que se enteró que hubo un cambio de fondo debido a que le empezaron a llegar los extractos; y que antes de cumplir los 52 años trató de realizar el traslado de régimen en varias ocasiones y no fue posible realizar el proceso hasta que finalmente le fue negada.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por

COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Además, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado *"... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen..."*.

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor JOSÉ WILLIAM VALENCIA PEÑA estuvo vinculado a cada entidad.

Se advierte igualmente que la orden a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes

destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene el apoderado de COLFONDOS S.A., dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA y ADICIONADA**.

Costas en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el 11 de julio de 2023, pero se **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a COLFONDOS S.A. y a PROTECCIÓN S.A. que, al momento de cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f3c4ab4d5afe3d53a53d60764b073ad7cae68982f213de36e2531df41faa15d1**

Documento generado en 27/10/2023 03:09:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>